

Roa & Asociados  
Abogados

Señores

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

En Su Despacho

Francisco E Salazar Valencia, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, comedidamente manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor **JOHN GROVER ROA SARMIENTO**, abogado titulado, identificado con las cédula de ciudadanía No. 79.343.655 de Bogotá y tarjeta profesional No. 104.759 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación el trámite de DEMANDA DE NULIDAD de las Resoluciones RDP 008985 del 6 de marzo y RDP 019118 del 14 de mayo de 2015 Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

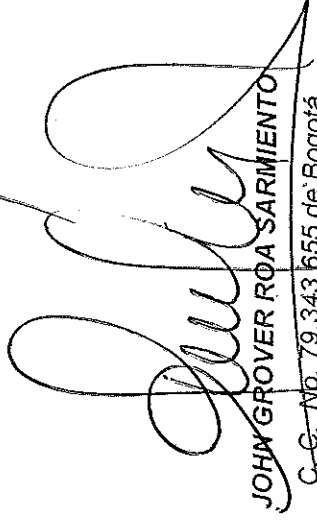
Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, sustituir, desistir, conciliar, transigir, renunciar, reasumir e interponer los recursos de ley, solicitar copias de actos administrativos de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

Sírvase, en consecuencia, reconocerle personería a mi apoderado.

Atentamente,

C. C. No. 6492252 De Tel Aviv

ACEPTO:

  
**JOHN GROVER ROA SARMIENTO**  
~~C.C. No. 79.343.655 de Bogotá~~  
T.P. No 104.759 del C.S. de la J.

Bogotá Cra. 8a. No. 16-88, Ofic. 907 Teléfono 3361122  
Ibagué Cra. 6 No. 13 - 22 Centro, Teléfono 098 - 2612287

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION  
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA  
PROTECCION SOCIAL - UGPP**

Bogotá D.C., 18/03/2015

**ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL**

En la fecha se notificó personalmente al Doctor HIDELFONSO GOMEZ ACERO identificado con CEDULA CIUDADANIA N° 3184059 expedida en SUBACHOQUE, en calidad de APODERADO SUSTITUTO de la Resolución N° RDP008760 del 05 de marzo de 2015, Por la cual se niega la reliquidación de una pensión de VEJEZ.

Después de leerla se le entregó una copia auténtica del mencionado Acto Administrativo, haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación ante LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

\_\_\_ Interpone Recurso      \_\_\_ Renuncia a Términos

Firma Notificado: \_\_\_\_\_

CC N°: 3184059 de SUBACHOQUE T.P. N°: 61575

Notificador: \_\_\_\_\_

SAUL HERNANDO SUANCHÁ TALERÓ  
DIRECTOR DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP

V.º B.º Asesor: XIMENA PAOLA REMOLINA C.

Nombre del Asesor: XIMENA PAOLA REMOLINA CASTELLANOS  
CC N°: 1010177573 de BOGOTÁ D.C.

Nombre Causante: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA

CC N°: 6492252 de TULUÁ

SOLICITUD N°: SOP201400057536



Unidad de Gestión  
Pensional y Parafiscales



**Radicado No 2015-514-066922-2**

Fecha Rad: 18/03/2015 08:16:00

Radicator: XREMOLINA Folios: 2 FOLIOS

Hacer lo correcto

genera bienestar

Dest. FRONT DIGITALIZACION DP

Remite: CU FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR

Atenderá entidad responsable según decreto 4269-11

Centro de Atención al Ciudadano

Cll 13#83A-18 Tel: 4926080 Bogotá D.C. - 018000423423

Sistema de Gestión - Dirección


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION  
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA  
PROTECCION SOCIAL - UGPP

Bogotá D.C., 19/06/2015

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la fecha se notificó personalmente al Doctor HIDELFONSO GOMEZ ACERO identificado(a) con CEDULA CIUDADANIA N° 3184059 expedida en SUBACHOQUE, en calidad de APODERADO SUSTITUTO de la Resolución N° RDP019118 del 14 de mayo de 2015, Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 8760 del 5 de marzo de 2015.

Después de leerla se le entregó una copia auténtica del mencionado Acto Administrativo, haciéndoles saber que con la presente queda agotada la vía gubernativa.

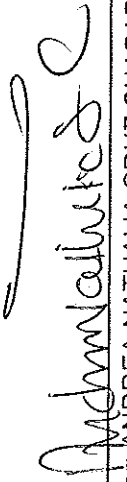
Firma Notificado:   
CC N°: 3184059 de SUBACHOQUE T.P. N°: 61575

Unidad de Gestión  
Pensional y Parafiscales  
**ugpp**



**Radicado No 2015-514-172500-2**  
Fecha Rad: 19/06/2015 09:13:50  
Radicador ACRUZC Folios: 2 FOLIOS  
Dest. FRONT DIGITALIZACIÓN DP  
Remite: CIU FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR  
Atenderá entidad responsable según decreto 4269-11  
Centro de Atención al Ciudadano  
Cll 19468A-18 Tel:4926080 Bogotá D.C.- 018000423423  
Sistema de Radicación - RadicaCol

Notificador:  
SAUL HERNANDO SUANCHIA TALERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCION  
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP

V.º B.º Asesor:   
Nombre del Asesor: ANDREA NATHALIA CRUZ CHAPARRO  
CC N°: 53032886 de BOGOTA D.C.

Nombre Causante: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA  
CC N°: 6492252 de TULUA  
SOLICITUD N°: SOP201500017944

44207

REPUBLICA DE COLOMBIA

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL 16 MAY 1998

RESOLUCION NO. 011309 de 199

RADICADO NO 17299/97

por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez.

LA SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, y en cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y.



C O N S I D E R A N D O:

Que el(a) señor(a) FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6.492.252 de Tulua (Valle), solicita a esta Entidad el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia por vejez radicada bajo el NO 17299 de fecha 22 de octubre de 1997.

Que el artículo 36 de la ley 100/93 establece:

"REGIMEN DE TRANSICION. : La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tenga treinta y cinco (35) o mas años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o mas años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de precios al Consumidor según certificación expedida por el DANE."

Que el petionario prestó los siguientes servicios al Estado:

ENTIDAD	DESDE	HASTA	D I A S	DEDUC LABORAD
---------	-------	-------	---------	---------------

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	01/04/71	30/09/97	0	9540
			0	9540

12 JUN 1998

W.F. PE 94.7

05.06.98

Valle

40-75

RESOLUCION NQ

011309 06 MAY 1998

RADICADO NQ17299/97

por la cual se reconoce una pensión de vejez

\*\*\*\*\*

que laboró un total de : 9540 días.

que nació el 03 de septiembre de 1942 y cuenta con más de 55 años de edad.

que en último cargo desempeñado por el peticionario fue el de PROFESOR ESPECIALIZADO.

que adquirió el status jurídico el 03 de septiembre de 1997.

que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 3 años 5 meses 3 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 03 de septiembre de 1997, así:

F A C T O R E S

V A L O R  
ACTUALIZADO

94	ASIGNACION BASICA	22.59	\$	604,316.00
	PRIMA TECNICA		\$	54,600.00
	BONIFICACION SERVIC.PREST		\$	25,406.00
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		\$	48,982.00

(Promedio mensual de 270 días ) \$ 733,304.00 \$ 286,143.64

95	ASIGNACION BASICA	19.50	\$	725,313.00
	PRIMA TECNICA		\$	62,900.00
	BONIFICACION SERVIC.PREST		\$	22,840.75
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		\$	57,798.00

(Promedio mensual de 360 días ) \$ 868,851.75 \$ 368,747.79

96	ASIGNACION BASICA	21.64	\$	862,739.00
	PRIMA TECNICA		\$	72,800.00
	BONIFICACION SERVIC.PREST		\$	27,135.58
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		\$	67,623.00

(Promedio mensual de 360 días ) \$ 1,030,297.58 \$ 365,913.57

97	ASIGNACION BASICA		\$	1,285,664.00
	BONIFICACION SERVIC.PREST		\$	52,982.88
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		\$	76,752.00

(Promedio mensual de 243 días ) \$ 1,415,398.88 \$ 278,947.22

T O T A L = \$ 1,299,752.23

Pension : (\$ 1,299,752.23 X 75% ) = \$ 974,814.17

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS,  
CON 17/100 M/CTE.

RESOLUCION NO

011309

01 MAY 1997

RADICADO NO17299/97

por la cual se reconoce una pensión de vejez

\*\*\*\*\*

Efectiva a partir del 01 de octubre de 1997.

DISTRIBUCION A CARGO :

DED. DIAS

FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL

0 9540

PROPORCION A CARGO :

VALOR-CUOTA

FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL

974,814.17

\$ 974,814.17

Son disposiciones aplicables: Ley 33/85, Ley 100/93, Decreto 1158/94, Sentencia 168 de la Corte Constitucional del 20 de abril de 1995.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago a favor del(a) señor(a) FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA, ya identificado(a), de una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantía de (\$974,814.17) NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 17/100 M/CTE., efectiva a partir del 01 de octubre de 1997. El petionario debe demostrar retiro definitivo del servicio en los términos previstos por la Ley, para el disfrute de esta pensión.

ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley con observancia del turno respectivo.

ARTICULO TERCERO: Esta pensión estará a cargo de:

E N T I D A D

DIAS

VALOR-CUOTA

FONDO DE PENSIONES PUB. DEL NIVEL NAL.

9540

\$ 974,814.17

\$ 974,814.17

ARTICULO CUARTO: La presente pensión estará sujeta a todas las incompatibilidades legales.

RESOLUCION NO

011309

05 MAY 1998

DE 199

RADICADO NO17299/97

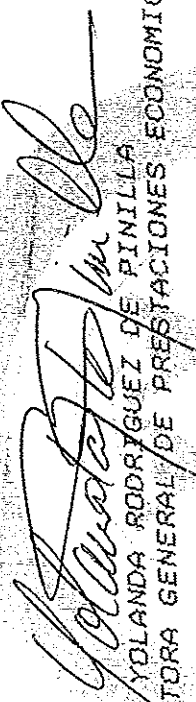
por la cual se reconoce una pensión de vejez

\*\*\*\*\*

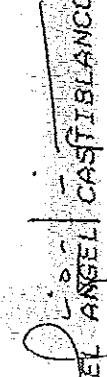
ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE al INTERESADO haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente providencia, puede interponer por escrito el recurso de Reposición ante la Subdirección General de Prestaciones Económicas o subsidiariamente el de Apelación ante la Dirección General. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

  
YOLANDA RODRIGUEZ DE PINILLA  
SUBDIRECTORA GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

MCA E11 - PI - 27/04/98

Sustanció: MIGUEL ANGEL CASTIBLANCO Revisó: 







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE

RESOLUCIÓN N° LMAC de 45591

RADICADO N° 5583/2006.

Por la cual se reliquida una pensión de Vajear (COPIA 2).

El(a) Asesor(a) de la Gerencia General, en uso de las atribuciones conferidas por las resoluciones, 0616 del 16 de Junio de 2006, y en cumplimiento de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que el señor SALAZAR VALENCIA FRANCISCO ENRIQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 5492252 de TULUA, en escrito de fecha 17 de febrero de 2006, solicita a esta Entidad se reliquide la pensión de vejez de conformidad con los arts 33 y 34 de la ley 100 de 1993, petición radicada bajo el numero 5583 de 2006.

Que el pensionario fue pensionado por esta Entidad mediante la Resolución No. 11309 de fecha 06 de mayo de 1998 en cuantía de 9974.814.17 M/CTE, efectiva a partir del 01 de octubre de 1997, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio oficial (21-10-13)

Que el(a) peticionario(a) aportó para la pensión los siguientes tiempos:

ENTIDAD	DESDE	HASTA	D I A S	DEDUC LABORAD
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	19710401	19970930	0	9540

Que se allegaron nuevos tiempos así:

ENTIDAD	DESDE	HASTA	D I A S	DEDUC LABORAD
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	19971001	19981030	0	390
			0	390

Que laboró un total de : 9930 días.

Que nació el 03 de septiembre de 1942 y cuenta con 63 años de edad

RESOLUCION N°  
Radicado N° 5583/2006

Página: 3 de 6  
Fecha : 25/09/2006

45591

Por la cual se liquida una pensión de Vejez (COPIA 2) DE SALAZAR VALENCIA FRANCISCO ENRIQUE

\*\*\*\*\*

1998 ASIGNACION BASICA 16.70 \$ 1574225.00  
CONIFICACION SERVIC.PRES \$ 48311.67  
INCREMENTOS POR ANTIGÜED \$ 89033.00

(Promedio mensual de 300 días) \$ 1711769.67 1711769.67 311230.85  
(No aplica IPC)

TOTAL = \$ 1.566.483.71

I.P.C. --> 1994:22.59 1995:19.46 1996:21.63 1997:17.68

Pensión : (\$1.566,483.71 X 75%) = \$1.174,862.78

ON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M/CIE.

DISTRIBUCION A CARGO :

DED. DIAS

FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL

0 9930

9930

PROPORCION A CARGO :

VALOR-CUOTA

FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL

\$ 1.174.862.78

\$ 1.174.862.78

Efectiva a partir del 01 de noviembre de 1998 pero con efectos fiscales a partir del 02 de febrero de 2002 por prescripción trienal.

Que respecto a la solicitud de liquidarle la prestación a conformidad con los arts 33 y 34, esta no es procedente en consideración a lo siguiente:

Que el Art. 33 de la Ley 100/93 señala:

ARTICULO 33: Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (35) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

07 SEP 2006

RESOLUCION N°  
Radicado N° 5593/2006

Página: 5 de 6  
Fecha : 05/09/2006

45591

Por la cual se reliquida una pensión de vejez (COPIA 2) DE SALAZAR VALENCIA FRANCISCO ENRIQUE

+++++

virtud del regimen que solicita le sea aplicado, encontrandonos que en el caso Sub- Examine el interesado ha venido devengado pensión por concepto de la resolución No. 11309 del 06 de mayo de 1998, a partir del 31 de octubre de 1998 fecha en la que el acreditado reciro del servicio oficial, por lo que el peticionario se vería avocado a devolver a esta Entidad los dineros percibidos por concepto de la resolución No. 11309 de 06 de mayo de 1998 con la cual fue incorporado en la nómina General de Pensionados hasta la fecha de consolidación de su nuevo status, por haber sido devengados excediendo los límites del nuevo regimen que solicita le sea aplicable.

Del las cosas, resultaría desfavorable la aplicación de la norma aludida a los intereses del señor FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR, habida cuenta que ha devengado pensión por más tiempo del que con el nuevo regimen le correspondería.

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993 y decreto 01 de 1984.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reliquidar la pensión del señor SALAZAR VALENCIA FRANCISCO ENRIQUE ya identificado, elevando la cuantía de la misma a la suma \$1.174.862.78 UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 78/100 M/CTE, efectiva a partir del 01 de noviembre de 1998 pero con efectos fiscales a partir del 02 de febrero de 2002 por prescripción trienal.

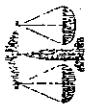
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia del artículo anterior por el Grupo de Nómina, se procedente liquidar las diferencias que resultaren de la pensión reliquidada contra la resolución N° 11309 de 1998, teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa.

07 SEP 2006

ARTICULO TERCERO: Esta reliquidación estará a cargo de:

E N T I D A D	DIAS	VALOR-CUOTA
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL	9930	\$ 1.174.862.78
		-----
		\$ 1.174.862.78

ARTICULO CUARTO : El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado la suma a que se refiere el artículo primero, con los reajustes de ley, previos los descuentos ordenados con observancia del turno respectivo, con cargo a la apropiación presupuestal correspondiente. Cuando el cobro se verifique por tercera persona deberá comprobarse su supervivencia.



Roa & Asociados

Abogados

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES  
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP  
Ciudad



REF.: DERECHO DE PETICIÓN  
STE: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA  
C.C. N° 6.492.252 DE TULUA

Radicado No 2014-514-344332-2  
Fecha Rad: 18/11/2014 09:05:46  
Radicador MUNICZ Folios 11 FOLIOS  
Dest. FRONT DIGITALIZACION DP  
Remitente CIU FRANCISCO ENRIQUESALAZAR  
Atenderá entidad responsable según decreto 4269-11  
Centro de Atención al Ciudadano  
Cil 18#68A-18 Tel:4926030 Bogotá D.C - 018000423423  
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales  
Ugpp  
Hacer lo correcto  
genera bienestar

JOHN GROVER ROA SARMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.343.655 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 104.759 del C.S. de J., obrando conforme al poder que en debida forma me ha conferido, FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, y que adjunto, respetuosamente me permito solicitar lo siguiente:

#### PETICION

1. Tramitar la REVISION DE LA PENSION DEJUBILACION, reconocida a favor del señor (a) FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA, por medio de la Resolución N° 011309 del 6 de mayo de 1998 y reliquidada por medio de la Resolución No. 45591 del 7 de septiembre de 2008, por sus servicios prestados a entidad oficial, con relación a los siguientes no tenidos en cuenta al momento del reconocimiento de la prestación social a favor de mi mandante tales como auxilio de alimentación, primas de vacaciones, primas de servicios, prima de navidad, quinquenio, auxilio por retiro y demás actores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición de su status Pensional, obrando conforme a lo dispuesto en la sentencia unificadora proferida por el Honorable Consejo de Estado del 04 de Agosto de 2010, dentro del radicado interno 0112-09, artículo 114 de la ley 1395 de 2010 y Sentencia C-539 de 2011, proferida por la Corte constitucional, Ley 6 de 1945 y 33 de 1985.

2. Ordenar la INDEXACION de las mesadas pensionales retroactivas, desde la fecha de la desvinculación laboral, hasta el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio Pensional

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Me baso en lo establecido, en la Ley 6 de 1945, Ley 4 de 1966, Ley 33 de 1985, Ley 100 de 1993, Sentencia de Homologación del Consejo de Estado de fecha 04 de Agosto de 2010, y demás normas concordantes y modificatorias y Sentencias del Honorable Consejo de Estado. Y además las prestaciones periódicas para su reclamación no prescribe el Derecho y para su acción no hay término de caducidad. Art. 136 que dice: "... sin embargo los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo..."

Invoco como fundamentos de derecho los convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los preceptos doctrinales, la ley, en particular la normatividad consagrada en la Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, ley 6ª. De 1945, ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

Atendiendo en los diferentes preceptos jurisprudenciales que reconocen la viabilidad de reconocimiento, Liquidación y pago en REVISION DE LA PENSION DE JUBILACION con inclusión de todos los factores Salariales, devengados el año inmediatamente anterior al cumplimiento del status Pensional se debe tener en cuenta las siguientes sentencias proferidas por las Altas Cortes, las cuales remito algunos apartes a continuación:

- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA.  
Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto



de dos mil diez (2010).- Radicación número: 25000-23-25-050-2006-07509-01(0112-09). Actor: LUIS MARIO VELANDIA. Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

**PENSION DE JUBILACION – Factores. Inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios. Interpretación taxativa vulnera el principio de progresividad. Principio de igualdad. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades ( Sentencia de Unificación )**

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación Pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación Pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquélla enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.

**FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985- ARTICULO 3 / LEY 62 DE 1985-ARTICULO 1**

**PENSION DE JUBILACION – Factores. Interpretación taxativa vulnera el principio de igualdad**

El artículo 53 de la Constitución Política, en virtud del cual en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho ha de optarse por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios. Es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación Pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.

**FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 53**

**PENSION DE JUBILACION – Factores. No taxatividad. Principio de la realidad sobre las formalidades**

En atención al citado precedente, es preciso aclarar que, la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos, sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir



de la base de liquidación Pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiando su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 150

PENSION DE JUBILACION – Factores. Principio de protección del erario público

Si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley oeban ser excluidos del ingreso base de liquidación Pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar. En este orden de ideas, la protección al erario público es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho.

PENSION DE JUBILACION – Liquidación con base en todos los factores salariales / SALARIO – Concepto

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando...

SENTENCIA C-539-11 expediente D-8351. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 114 (parcial) de la Ley 1395 de 2010 "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial" Demandante: Franky Urrego Ortiz Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., seis (6) de julio de los mil once (2011).

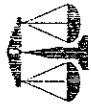
PRECEDENTE JUDICIAL EN RESOLUCION DE PETICIONES Y EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A PENSIONES, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y CIERTOS DAÑOS-Fuerza vinculante

ACCION PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes

PRECEDENTE JUDICIAL DICTADO POR LAS ALTAS CORTES-Obligación de las autoridades públicas

Todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta en



que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política.

#### **SUJECION DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A LA CONSTITUCION Y LA LEY-Contenido**

**AUTORIDADES PUBLICAS ADMINISTRATIVAS-**Acatamiento de las decisiones judiciales y del precedente judicial dictado por las Altas Cortes/AUTORIDAD PUBLICA-Prerrogativas justificadas en una razón suficiente/ACTIVIDAD JUDICIAL-Sujeción al imperio de la ley

**INTERPRETACION ADECUADA DEL IMPERIO DE LA LEY-Contenido/INTERPRETACION ADECUADA DEL IMPERIO DE LA LEY-**Debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales

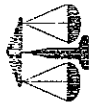
**RESPECTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-**  
Hace parte del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa

**AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-**Obligación de interpretar y aplicar las normas a los casos en concreto de conformidad con la Constitución y el precedente judicial constitucional

Las autoridades administrativas deben necesariamente respetar y aplicar el precedente judicial, especialmente el constitucional y si pretenden apartarse del precedente deben justificar con argumentos contundentes las razones por las cuales no siguen la posición del máximo intérprete, especialmente del máximo intérprete de la Constitución.

**INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION-**Jurisprudencia constitucional/SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Constituyen para las autoridades administrativas una fuente obligatoria de derecho

La jurisprudencia constitucional ha precisado que, dado que todas las autoridades se encuentran sometidas al "imperio de la ley" lo cual significa por sobre todo al imperio de la Constitución, de conformidad con los artículos 2 y 4 Superiores, (i) la tarea de interpretación constitucional no es tarea reservada a las autoridades judiciales, y (iii) que dicha interpretación y aplicación de la ley y de la Constitución debe realizarse conforme a los criterios determinados por el máximo tribunal competente para interpretar y fijar el contenido y alcance de los preceptos de la Constitución. Esta obligación por parte de las autoridades administrativas de interpretar y aplicar las normas a los casos en concreto de conformidad con la Constitución y con el precedente judicial constitucional fijado por esta Corporación, ha sido reiterada en múltiples oportunidades por esta Sala, poniendo de relieve el deber de las autoridades administrativas de ir más allá de las normas de inferior jerarquía para aplicar principios, valores y derechos constitucionales, y de aplicarlos en aras de protegerlos y garantizarlos. En relación con los parámetros de interpretación constitucional para la administración, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que (i) la Constitución es la norma de normas, (ii) su interpretación definitiva corresponde a la Corte Constitucional, de conformidad con el art. 241 Superior, (iii) que por tanto al ser la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, la interpretación que haga de ella es vinculante para todos los operadores jurídicos, administrativos o judiciales; y (iv) que el nivel de



vinculatoriedad del precedente judicial es absoluto en el caso de las autoridades administrativas, quienes no gozan de la autonomía que le corresponde a los jueces. A este respecto ha dicho la Corte: "La Constitución Política es una norma. Por lo mismo, su aplicación y respeto obliga a un constante ejercicio hermenéutico para establecer su sentido normativo. La función definitiva en esta materia corresponde a la Corte Constitucional, conforme se desprende del artículo 241 de la Constitución. Así, al ser guardiana de la supremacía e integridad de la Carta, la interpretación que la Corte haga del texto constitucional es vinculante para todos los operadores jurídicos, sea la administración o los jueces." En suma, en relación con la obligatoriedad y alcance de la doctrina constitucional, la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que esta deviene de que la Constitución es norma de normas, y el precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta, por eso, las sentencias de la Corte Constitucional constituyen para las autoridades administrativas una fuente obligatoria de derecho.

**MARGEN DE LIBERTAD INTERPRETATIVA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS AL MOMENTO DE APLICAR UNA NORMA A UN CASO PARTICULAR-Debe ser ajustada a la Constitución y a la Ley/APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Debe ser estricta cuando se trata de decisiones de control abstracto de constitucionalidad con efectos erga omnes**

**CORTE CONSTITUCIONAL-Encargada de fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales/SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Tienen una proyección vinculante**

**NORMA INEXEQUIBLE-Efectos/SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Al servidor público le está vedado acordarle a la ley un significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política**

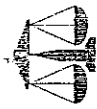
En cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad, es claro que la norma jurídica es expulsada del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada para fundamentar ninguna actuación o decisión por parte de las autoridades públicas, ni seguir produciendo ningún tipo de efectos jurídicos, ya que ello implica la violación directa de la Constitución. A este respecto la Corte sostuvo que "una vez la Corte Constitucional declara inexecutable una disposición legal, ningún servidor público puede emitir resolución, dictamen o concepto fundado en aquélla, por cuanto de esta manera se estaría desconociendo directamente la Constitución. De igual manera, una vez proferido un fallo de exequibilidad condicionado, al servidor público le está vedado acordarle a la ley un significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política."

**VINCULATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Componentes/RATIO DECIDENDI, OBITER DICTUM Y DECISUM-Componentes básicos de los fallos de constitucionalidad**

**ACCION DE TUTELA-Obligatoriedad de la aplicación del precedente judicial por parte de las autoridades públicas/ACCION DE TUTELA-Vigencia y validez de la fuerza vinculante del precedente judicial/RATIO DECIDENDI-Constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas/SENTENCIAS DE TUTELA-Valor doctrinal de los fundamentos jurídicos o consideraciones/ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional sobre interpretación de texto normativo/RATIO DECIDENDI EN SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Fuerza y valor de precedente**

**DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE ORDEN CONSTITUCIONAL-Afecta derechos fundamentales de los destinatarios de las normas/DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE ORDEN CONSTITUCIONAL-Puede conllevar a una infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general, casos en los cuales se configura igualmente el delito**





## Roa & Asociados Abogados

de prevaricato por acción/ACCION DE TUTELA-Procede cuando los jueces en sus providencias se apartan arbitrariamente del precedente horizontal o vertical

**FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO FUENTE DE DERECHO-Jurisprudencia constitucional OBLIGACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE TENER EN CUENTA LOS PRECEDENTES JUDICIALES PARA SUS DECISIONES Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Alcance del contenido normativo SUJECION DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A LA CONSTITUCION, A LA LEY Y PRECEDENTE JUDICIAL DE LAS ALTAS CORTES-Reglas jurisprudenciales fijadas en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional**

La Corte reitera nuevamente el mandato superior de sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y por ende al precedente judicial de las Altas Cortes, en desarrollo del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; los fines esenciales del Estado–art.2-; la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; la sujeción de las autoridades públicas a la Constitución –artículos 6º, 121 y 123 CP-; el debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; el derecho a la igualdad –art.13 CP-; la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; la fuerza vinculante del precedente judicial –artículo 230 superior-; y la fuerza vinculante de las decisiones de constitucionalidad –artículo 241 de la Carta Política-. En desarrollo de estos preceptos constitucionales, la Sala reitera igualmente, las reglas jurisprudenciales expuestas en detalle en la parte motiva y considerativa de esta sentencia, que han sido fijadas y desarrolladas en múltiples pronunciamientos de esta Corporación, entre las más importantes las siguientes: (i) todas las autoridades públicas administrativas se encuentran sometidas al imperio de la Constitución y la ley, por expreso mandato constitucional, lo cual implica el necesario acatamiento del presente judicial emanado de las Altas Cortes; (ii) el entendimiento del imperio de la ley, a la que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales; (iii) todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas a los casos concretos de conformidad con la Constitución y la ley; (iv) todas las autoridades administrativas deben aplicar las normas legales en acatamiento del precedente judicial de las Altas Cortes o fundamentos jurídicos aplicados en casos análogos o similares, aplicación que en todo caso debe realizarse en consonancia con la Constitución, norma de normas, y punto de partida de toda aplicación de enunciados jurídicos a casos concretos; (v) el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (a) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-; (b) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (c) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (d) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.); y (e) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.; (vi) si existe por tanto una interpretación judicial vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha interpretación; ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces; (vii) aún en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan sido interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades administrativas no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad con el precedente judicial existente de las altas Cortes; (viii) en caso de falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde, prioritariamente, al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; (ix) en caso de existencia de diversos criterios jurisprudenciales sobre una misma materia, corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas, evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales aplicables para fundamentar la mejor aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su



totalidad, y optar por la decisión que, de mejor manera interprete el imperio de la Constitución y de la ley, para el caso concreto; (x) los fallos de la Corte Constitucional tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, en su parte resolutoria (erga omnes en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas; (xi) el desconocimiento del precedente judicial de las Altas Cortes por parte de las autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria por parte de las autoridades administrativas, (ii) la interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela contra actuaciones administrativas o providencias judiciales.

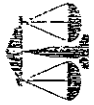
#### **APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Problema jurídico planteado se distingue del precedente en materia judicial**

El problema jurídico planteado hace referencia directa a la aplicación del precedente judicial en materia administrativa, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, y no a la aplicación del precedente en materia judicial. Estos problemas, si bien presentan unos elementos comunes, como se puso en evidencia en el recuento jurisprudencial realizado en la parte motiva de esta sentencia, constituyen situaciones jurídicas bien distintas, tanto por los sujetos obligados a aplicar el precedente, que en este caso son las autoridades administrativas, como por el nivel de vinculatoriedad del precedente judicial, que en el caso de las autoridades administrativas es estricto, en razón a que éstas se encuentran sujetas, como todas las autoridades públicas y servidores públicos en el país, a la Constitución y a la ley, más no gozan de la autonomía que se predica de las autoridades judiciales, en virtud de la cual les es permitido a estas últimas apartarse del precedente judicial impuesto por las Altas Cortes en ciertos casos excepcionales y razonablemente justificados.

#### **APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Finalidad del Legislador con la creación de la norma de descongestión judicial/APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Finalidad de la medida**

La voluntad del legislador fue la de consagrar expresamente el deber de las autoridades administrativas de acatar y aplicar el precedente judicial, tanto en la jurisdicción ordinaria, en la contencioso administrativa, como en la constitucional, especialmente en algunas materias neurálgicas que han producido gran congestión judicial a partir de las acciones judiciales que han generado, tales como las acciones de tutela interpuestas o acciones judiciales que se han originado por el desconocimiento del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas a la hora de adoptar sus decisiones o desarrollar sus actuaciones administrativas. Por tanto, la finalidad de la medida es claramente la adopción de mecanismos para descongestionar la justicia colombiana, a través del acatamiento del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas, especialmente en relación con ciertos temas neurálgicos, en donde se presenten situaciones similares o análogas que tengan que decidir estas autoridades con el fin de lograr celeridad y uniformidad a los procesos administrativos e impedir la congestión judicial debido a la generación de controversias judiciales por el desconocimiento del precedente judicial en casos similares o análogos, objetivo que resulta plenamente constitucional.

#### **DERECHO VIVIENTE-Jurisprudencia constitucional**



Roa & Asociados  
Abogados

OMISION LEGISLATIVA-Modalidades/OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-No procede el análisis constitucional/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procede su estudio constitucional por cuanto se trata de una disposición legal incompleta que vulnera ciertas garantías constitucionales/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Cumplimiento de criterios para su configuración

SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma acusada deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional

PETICION ESPECIAL

1. Solicito recibir la documentación presentada respetuosamente y hacer sobre ellos un pronunciamiento de fondo si es aceptada o negada la petición, por acto administrativo, susceptible de impugnaciones o recursos para poder así agotar la vía gubernativa.
2. Si no es recibida la elevo como DERECHO DE PETICION constitucional de que trata el Art. 23 de la C.P.
3. De conformidad con el Art. 16 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995, no anexo ninguna otra prueba por cuanto todas reposan en la Entidad.

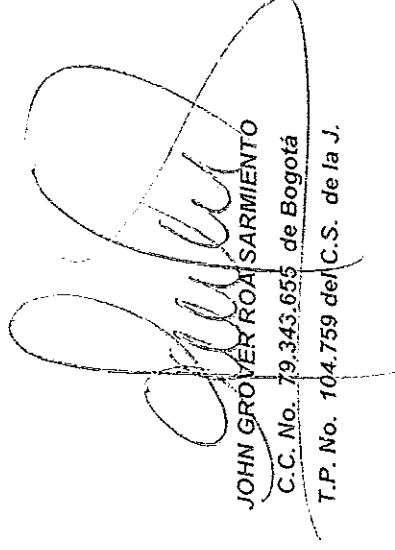
PRUEBAS

- Poder debidamente conferido.
- Formulario debidamente diligenciado.
- Original del Constancia laboral y Salarios de los años 1996 y 1998, expedido por el ICA, de fecha 29 de agosto de 2012.
- Demás documentos que obran en el expediente de la pensión.

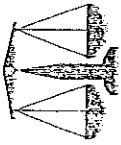
NOTIFICACIONES

Las recibo en la Carrera 8 No. 16-88 oficina 907 de Bogotá D.C., teléfono 336 11 22.

Atentamente,

  
JOHN GROVER ROA SARMIENTO  
C.C. No. 79.343.655 de Bogotá  
T.P. No. 104.759 del C.S. de la J.

ccm.



Roa & Asociados  
Abogados

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y  
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

En Su Despacho

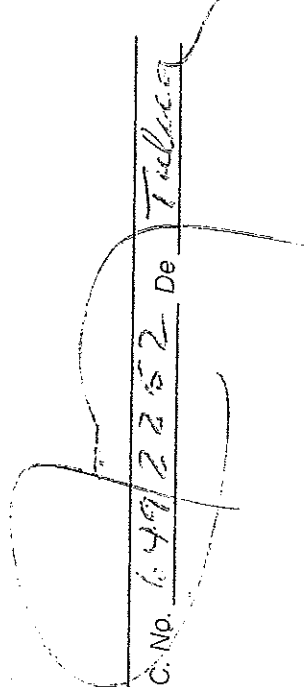
F. P. Anderson E. Salazar D. V.

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, comedidamente manifiesto que confiero poder especial amplio y suficiente al Doctor JOHN GROVER ROA SARMIENTO, abogado titulado, identificado con las cédula de ciudadanía No. 79.343.655 de Bogotá y tarjeta profesional No. 104.759 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie y lleve hasta su terminación el trámite de REVISIÓN DE LA PENSION DE JUBILACION de que trata la Ley 6 de 1945, Ley 4 de 1956, Ley 23 de 1935, Ley 100 de 1993, SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO del 24 de agosto de 2010 y DEMAS NORMAS CONCORDANTES Y MODIFICATORIAS

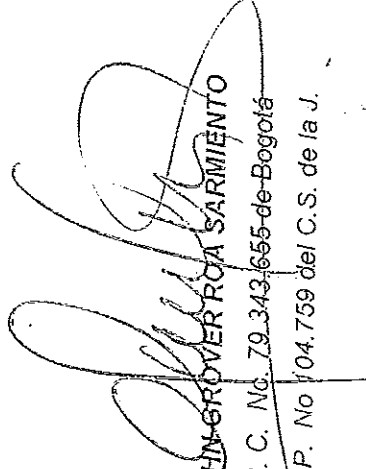
Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, sustituir, desistir, conciliar, transigir, renunciar, reasumir e interponer los recursos de ley, solicitar copias de actos administrativos de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

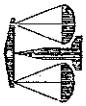
Sírvase, en consecuencia, reconocerle personería a mi apoderado.

Atentamente,

  
C. C. No. 6.49/2252 De Tulua

ACEPTO:

  
JOHN GROVER ROA SARMIENTO  
C. C. No. 79.343.655 de Bogotá  
T.P. No. 104.759 del C.S. de la J.



Roa el Asociados  
Abogados

Señores

UNIDAD DE ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES  
DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP  
Bogotá D.C.

Ref.: RECURSO DE APELACION V/S RESOLUCION No. 008760 del 5 de marzo de 2015  
RADICADO No. SOP 201400057536  
STE: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA  
C.C No 6.492.252 de Tula

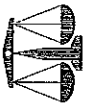
JOHN GROVER ROA SARMIENTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.343.655 de Bogotá y Tarjeta Profesional número 104.759 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en esta ciudad, actuando conforme al poder que me ha conferido el (la) señor (a) FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 6.492.252 de Tula, de la manera más respetuosa, en nombre y representación de mi poderdante, dentro del término legal, me permito interponer RECURSO DE APELACION en contra de la decisión referenciada, por medio de la cual se **NIEGA LA RELIQUIDACION DE UNA PENSION DE VEJEZ**

#### FUNDAMENTO DEL RECURSO

Dentro de la Resolución que recorro, se **NIEGA UNA SOLICITUD**, bajo el argumento de: "Que habrá de negarse la solicitud de Reliquidación Pensional elevada bajo el alcance enunciativo de los elementos salariales devengados por el empleado público, porque dicha petición no se encuentra en armonía con aquellos factores que, bajo competencia constitucional y reglamentaria, han definido el Legislador o el Presidente de la República; así mismo porque los elementos reclamador como base para la Reliquidación, no se encuentra debidamente enlistados dentro de los factores con incidencia Pensional previstos en el Decreto 1158 de 1995. Y por último, porque la referida solicitud no guarda relación con los precedentes jurisprudenciales vinculantes y preferentes definidos por la Corte Constitucional sobre la materia, ni se encuentra a tono con la alineada jurisprudencia de la Corte Suprema: de Justicia y la del Consejo de Estado".

Igualmente en el Decreto 1045 de 1978 en su art. 45 de los efectos salariales para la liquidación de cesantías y pensiones en la cual dice cuales son los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de una pensión como es la asignación básica mensual, dominicales, horas extras, primas, bonificaciones, viáticos entre otras.

Con la anterior omisión de la **UNIDAD DE ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP**, se están lesionando notoriamente los intereses de mi poderdante pues se está desmejorando la mesada al omitir la inclusión de las primas, además, teniendo en cuenta el espíritu de la Ley 33 de 1985 que en su artículo primero establece: "...que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación más elevada del último año de servicio equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación promedio QUE SIRVIO DE BASE PARA LOS APORTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO. NO QUEDAN SUJETOS A ESTA REGLA GENERAL LOS EMPLEADOS OFICIALES QUE TRABAJAN EN ACTIVIDADES QUE POR SU NATURALEZA



Roa & Asociados  
Abogados

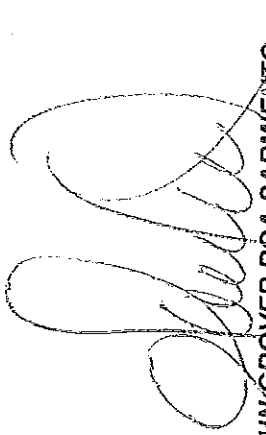
JUSTIFIQUEN LA EXCEPCION QUE LA LEY HAYA DETERMINADO EXPRESAMENTE, NI  
AQUELLOS QUE POR LEY DISFRUTEN DE UN REGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES" (las  
mayúsculas y el subrayado fuera de texto).

Considero suficientes los motivos para REVOCAR o MODIFICAR la RESOLUCION impugnada y  
en su lugar se acceda a la petición, en el sentido de tener en cuenta todos los factores para el  
promedio y posterior porcentaje la Revisión o Reliquidación de Pensión, todos los factores que  
constituyen salario, incluyendo todas las primas.

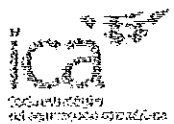
**NOTIFICACIONES**

Mi poderdante y solicitante como el suscrito apoderado recibiremos notificaciones en la carrera 8ª  
No. 16-88 Oficina 907 de Bogotá, teléfono 3361122.

Atentamente,

  
JOHN GROVER ROA SARMIENTO  
C.C. No. 79.343.655 de Bogotá.  
T.P. No. 104.759 del C.S. de la J.

Ccm

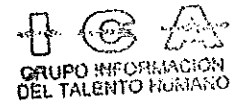


INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS DE DESTAQUE DEL TALENTO HUMANO Y RECURSOS  
CERTIFICAN:

QUE EL CERRAR: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA  
HA SIDO RECONOCIDO POR SU DESTAQUE EN SU CATEGORÍA: INGENIERO AGRÓNOMO  
DEPARTAMENTO DONDE SE ENCUENTRA: C.A.S.: 07 MUNICIPIO: 07 CLASE (N):  
FECHA INGRESO: 01/04/1971 FECHA RETIRO: 29/11/1988  
CATEGORÍA: PROPEC. ESPECIALIZADO 3010 - 10  
PUNTO: 15  
CARRERA: 15  
CARRERA: 15  
CARRERA: 15

PERIODO			FACTORES - SALIDALES										FACTORES - SALIDAS - INGRESOS Y RETIRO				TOTAL	APORTE PARA PENSION
MESES	AÑO	DÍAS	VALOR BASE	INCREMENTO POR ANTIQUEDAD	PRIMA TECNICA	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS	INCREMENTO POR SERVICIOS		
NOVIEMBRE	96	30	742.739	87.623	72.800												1.003.162	33.837
DICIEMBRE	96	31	857.739	87.623	72.800												1.170.835	33.837
ENERO	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
FEBRERO	97	28	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
MARZO	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
ABRIL	97	30	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
MAYO	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
JUNIO	97	30	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
JULIO	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
AGOSTO	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
SEPTIEMBRE	97	30	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
OCTUBRE	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
NOVIEMBRE	97	30	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
DICIEMBRE	97	31	1.285.664	76.752													1.362.416	45.982
ENERO	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
FEBRERO	98	28	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
MARZO	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
ABRIL	98	30	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
MAYO	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
JUNIO	98	30	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
JULIO	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
AGOSTO	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
SEPTIEMBRE	98	30	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
OCTUBRE	98	31	1.574.225	89.033													2.081.415	56.100
TOTALES		730	33.292.606	1.926.600	143.600	0	2.034.055	0	0	0	2.034.055	3.113.923	4.814.181	1.689.415	3.517.676		50.270.987	1.715.349

QUE EL (EX) FUNCIONARIO A QUIEN SE REFIERE LA PRESENTE CERTIFICACION HIZO LAS CONSECUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 100 DE 1993, SOBRE LOS FACTORES DECISIVOS DEL DECRETO 891 DE 1994.  
QUE LOS DESCUENTOS DE LEY PARA EFECTOS DE PENSION SE HICIERON SOBRE LOS SIGUIENTES FACTORES: SALARIO BASICO, ANTIQUEDAD, PRIMA TECNICA y SUMINISTRACION POR SERVICIOS.  
SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, A LOS (29) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2013.



1 Patricia Veloz GARCIA

Guillermo



Numeral 1º

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA

Art. 162 C.P.A

DESIGNACION DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES

Numeral 1

PORTE DEMANDANTE

NOMBRES FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA  
EDAD MAYOR DE EDAD  
DOMICILIO BOGOTA  
APODERADO JUDICIAL Dr. JOHN GROVER ROA SARMIENTO

PARTES DEMANDADAS

NOMBRES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

REPRESENTANTE Doctor MANUEL GUSTAVO RIVEROS APONTE y/o quien haga sus veces

DOMICILIO

Bogotá, D.C.

INTERVINIENTE

NOMBRES

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

REPRESENTANTE

PROCURADOR DELEGADO ANTE EL JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

DOMICILIO

Bogotá D.C.

Art. 162 Núm. 2º 163 y 165 del C.P.A. LEY 1437 DE 2011

PRETENSIONES DE LA DEMANDA

DECLARATIVAS

1. Declarar que es nulo (a) el (la) Resolución RDP 008985 del 6 de marzo de 2015, proferido por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL, por medio de la cual se NIEGA LA RELIQUIDACION DE UNA PENSION DE VEJEZ.
2. Declarar que es nulo (a) el (la) Resolución No. RDP 019118 del 14 de mayo de 2015, proferido por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL, por medio de la cual se RESUELVE UN RECURSO DE APELACION EN CONTRA DE LA RESOLUCION. No. RDP 008985 del 6 de marzo de 2015.
3. Declarar que el (la) señor (a) FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA, tiene derecho a que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL le reconozca, liquide y pague el valor correspondiente a la REVISION DE PENSION DE VEJEZ liquidando el 75% del valor de los salarios





devengados durante el último año de servicios de conformidad con la ley 6 de 1945, Ley 4 de 1966, Ley 33 de 1985, Decreto 1045 de 1978 y 71 de 1988 y Sentencia de Homologación.

CONDENATORIAS

1. Se condene a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL**, a que le reconozca y pague el valor correspondiente a la *Pensión de vejez* liquidando el 75% del valor de salarios devengados durante el último año de servicios, de conformidad con lo establecido con la 6 de 1945, Ley 33 de 1985, ley 4 de 1966, 71 de 1988, Decreto 1045 de 1978.
2. Condenar a la demandada a reconocer a favor del (a) señor (a) **FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA**, a aumentar el valor de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno Nacional, las primas y demás emolumentos que constituyen el salario, a partir de la nueva cuantía del 75%.
3. Condenar a la entidad demandada a reconocer a favor del (a) señor (a) **FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA**, sobre las diferentes mesadas generadas de la *Pensión Jubilación* por la inclusión de todos los factores salariales.
4. Condenar a la demandada a reconocer sobre las mesadas adeudadas a mi mandante, los ajustes de valor de dichas sumas, conforme al índice de precios al consumidor y al mayor y tal como lo autoriza el artículo 195 de la Ley 1437 del CPA.
5. Condenar a la demandada a reconocer a favor de mi poderdante los intereses moratorios, contados después de la ejecutoria del fallo, si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 195 de la Ley 1437 del CPA.
6. Condenar a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** a que de cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el Artículo 195 de la Ley 1437 del CPA.
7. Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias del proceso.

Las anteriores peticiones tienen como fundamento la siguiente relación histórica de hechos:

**Art. 162 Numeral 3 DEL CPA LEY 1437 DE 2011**

**HECHOS FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES**

Numeral 3º

1. La *Caja Nacional de Previsión Social*, por medio de la Resolución No.011309 del 6 de mayo de 1998, por la cual se reconoce una pensión vitalicia de vejez y la Resolución No. 45591 del 7 de septiembre de 2008 por la cual se Reliquida una pensión de vejez a favor del (a) señor (a) **FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA**, aplicando la ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que para el año de 1985 en que entra en vigencia la ley 33 de 1985 mi poderdante llevaba más de 15 años laborando al servicio del Estado, por lo que se debe aplicar la ley 33 de 1985 y no la ley 100 de 1993 como equivocadamente lo hace, además en el momento de efectuar la liquidación no le tuvo en cuenta el valor total de las primas y demás emolumentos devengados por mi poderdante en el año de consolidación del status pensional, de conformidad con la ley 6 de 1945, Ley 4ª de 1966, Ley 33 de 1985, Ley 62 de 1965, Decretos 81 de 1976, Decreto 1045 de 1978, Decreto 01/84 lo que le

Bogotá Cra. 8. No. 16 - 88, Ofic. 907 Teléfono 3361122  
Ibagué Cra. 6 No. 13 - 22 Centro, Teléfono 098 - 2623816



representaba a mi mandante una suma que es superior a la que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** le reconoció.

2. En virtud a lo anterior presenté el día 13 de noviembre del 2014 y el 25 de marzo de 2015, presente ante la Entidad de Previsión, que se revisara el monto de la Pensión de Jubilación de la Resolución que le reconocen el derecho prestacional, teniendo en cuenta la inclusión de todos los factores salariales y anexando a la solicitud la totalidad de los documentos que se consideraran necesarios para efectuar dicho reconocimiento.
3. Mi poderdante tiene derecho a que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** establezca el monto de la pensión, de conformidad con la Ley 33 de 1985 que en su parágrafo 2, establece: **Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.** En el presente caso la Entidad liquida la pensión de acuerdo a la Ley 100/93, desmejorando ostensiblemente los ingresos a mi poderdante.
4. Igualmente la Entidad de Previsión esta lesionando los intereses de mi poderdante al no liquidarle la totalidad de factores salariales que devengaba mi poderdante en el año de adquirir el status de conformidad con lo establecido en la ley 33 de 1985 que ordena que la pensión de jubilación debe ser el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, y de acuerdo al certificado expedido por la autoridad competente.
5. Resulta lamentable que los funcionarios encargados de aplicar la Leyes, las interpreten a su propio criterio. Tales políticas son las que hacen que las Entidades encargadas de tramitar las prestaciones se convirtieran en organismos que en nada constituyen a la filosofía del Estado de Derecho, instituido en la Constitución Nacional.
6. Los pensionados son titulares de un derecho de rango constitucional a recibir puntualmente las mesadas que le corresponden y a que el valor de éstas se actualice periódicamente según el ritmo del aumento en el costo de la vida, teniendo en cuenta que todo pago efectuado en Colombia, al menos en las circunstancias actuales, debe adoptarse a las exigencias propias de una economía inflacionaria.
7. El Honorable Consejo de Estado define el salario "como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador." En efecto, según el artículo 127 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990) "constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que ese adopte como, primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones". En similar sentido el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 establece que "además de la asignación básica fijada por la Ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
8. Los derechos laborales y prerrogativas establecidas a favor de los trabajadores colombianos son irrenunciables y no pueden ser desconocidos ni vulnerados.



9. El artículo 53 de la Carta Magna, consagra los derechos mínimos fundamentales para los trabajadores, entre ellos se encuentra la garantía que debe dar el Estado al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. El derecho al trabajo, por su parte, garantiza al individuo la posibilidad de ejercer libremente un actividad con miras a asegurar su existencia en un plano de sociabilidad.
10. La Constitución más que el trabajo como actividad abstracta, protege al trabajador y a su dignidad, a los derechos adquiridos conforme a la Ley. En concordancia con lo normado por este artículo la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL**, debe reconocer y pagar a mi representado la **REVISION DE LA PENSION DE VEJEZ**, incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos por el beneficiario.
11. Es procedente la condena No. 3 por cuanto en sentencia C-367 de 1995 establece: (Se transcribe) " Las obligaciones de pagar oportunamente las pensiones y de asumir, en caso de no hacerlo, unos intereses de mora que consulten la real situación de la economía se derivan directamente de la Constitución y deben cumplirse automáticamente por los entes responsables... ", de conformidad con lo expuesto, mi poderdante tiene derecho a que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** reconozca sobre la sumas adeudadas los intereses moratorios.
12. El (la) señor (a) **FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA**, me ha conferido poder especial para entablar demanda ordinaria laboral contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL**, a fin de lograr la **REVISION DE LA PENSION DE VEJEZ INCLUYENDO TODOS LOS FACTORES SALARIALES**.
13. Conforme lo establece la Ley 490 de 1998, la demandada es un establecimiento público del orden Nacional, creado mediante la Ley 6 de 1945, transformándose en Empresa Industrial y Comercial del Estado.

**ART.162 Numeral 4 DEL CPA LEY 1437 DE 2011**

**FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES**  
**NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION**

Numeral 4º

Con el acto administrativo demandado y que fuera proferido por la entidad demandada, se desconocen no solo normas Constitucionales sino también de menor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico Colombiano.

**DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL**

La entidad demandada al proferir los actos administrativos acusados, debe siempre respetar el ordenamiento jurídico interno.

La demandada vulneró el derecho fundamental de la igualdad, toda vez que a mi poderdante, se le ha negado el derecho que tiene a que se le liquide y por ende se le incremente su mesada pensional como a muchos otros servidores del Estado y que en su oportunidad adquirieron el derecho de la misma Caja Nacional de Previsión Social y a quienes si se les ha incluido la totalidad de los factores salariales al liquidar su primer mesada pensional.



El derecho al trabajo igualmente resulta afectado toda vez que mi poderdante, luego de haber prestado sus servicios y haber adquirido el derecho a la pensión mensual de jubilación, a liquidar su pensión, se le desconoce la inclusión del valor total devengado incluyendo los factores salariales que hicieron parte de su ingreso mensual devengado. En consecuencia se desconoce su derecho al trabajo con posterioridad a la prestación de sus servicios, en condiciones dignas y justas.

Se vulnera igualmente la Seguridad Social de un servidor público que luego de haber cumplido los requisitos exigidos, sin mayores argumentos jurídicos, se le niega el derecho a acceder a su mesada pensional, incluyendo no solo su remuneración básica mensual sino la totalidad de los factores salariales en el valor de su pensión mensual de jubilación.

Igualmente, con los actos administrativos acusados se quebranta la protección especial que la Constitución brinda a la seguridad social como un derecho de carácter público y obligatorio; pues no se justifica que luego de haber prestado sus servicios al Estado durante toda su vida productiva, manteniendo un ingreso mensual, cuyo presupuesto familiar y personal depende de él, al momento de entrar a disfrutar de su pensión mensual de jubilación, su ingreso se ve afectado enormemente, pues resulta recibiendo un valor inferior al 50% de su ingreso mensual como trabajador, lo cual genera desconcierto y a la par puede convertirse en un factor más de violencia.

Igualmente se vulnera la norma Constitucional que garantiza los derechos adquiridos conforme a las normas legales vigentes. El derecho a la inclusión de la totalidad de los factores salariales para deducir la cuantía de la primera mesada pensional de la totalidad de los factores salariales para deducir la primera mesada pensional de los servidores del Estado, es un derecho adquirido por mi mandante, conforme a las normas legales vigentes y al cual se accede sin ninguna otra consideración precisamente en atención a la vigencia de normas legales. En este caso en concreto, no es que se esté violando por una ley posterior, sino que se esté desconociendo por la Administración de la entidad de previsión hoy demandada aquella norma que dio origen al derecho adquirido y del cual es titular mi poderdante.

Es así como en esta oportunidad se debe dar aplicación a lo preceptuado en los artículos 89 y 90 de la Constitución Política Colombiana a fin de garantizar a los administrativos una vida digna y el pleno ejercicio de sus derechos legalmente adquiridos.

#### **NORMAS VIOLADAS DE CARACTER LEGAL:**

**PRECEPTOS LEGALES:** Igualmente la entidad **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL**, al proferir los actos acusados, viola esencialmente la Ley 6ª de 1945, Decreto 1600 DE 1945, Ley 33 de 1985, Decreto 1743 de 1966.

#### **LEY 4 DE 1966 Y LEY 33 DE 1985**

La Ley 4ª de 1966, determina que la cuantía de la pensión mensual de jubilación equivale al 75% del promedio mensual devengado en el último año de prestación de servicios, en concordancia con el artículo 5º del Decreto 1743 de 1966, y no excepción de esta cuantía a pensión alguna.

El Art. 4º de la Ley 4ª de 1966 fue reglamentado por el artículo 5º, del Decreto 1743 del mismo año, el cual establece: "A partir del 23 de abril de 1966 las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan



derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el 75% del promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios”.

El consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo con ponencia del Dr. **REINALDO ARCINIEGAS BAEDECKER**, en sentencia de noviembre 27 de 1987, expediente 2158, actor **DAGOBERTO GRIMALDOS VALENCIA**, concluyó que a la Pensión de Jubilación le es aplicable la Ley 4 de 1966 en su cuantía y ésta es de 75% del promedio mensual obtenido en el último años de servicios.

Además, en sentencia del 16 de Octubre de 1996, el Tribunal Administrativo de Boyacá, resuelve el caso en litis favorablemente, la que fue confirmada por el Consejo de Estado, con ponencia del Doctor **CARLOS A. ORJUELA**, dentro del expediente No. 15.377, siendo actor **MARIA CRISTINA MACHADO DE SACHICA**.

Queda claro entonces, que la cuantía de la Pensión de Jubilación se liquida con base en el 75% de la asignación mensual incluyendo **TODOS LOS FACTORES SALARIALES**, y por tanto es procedente que la Entidad efectúe la liquidación de la Pensión de mi poderdante aplicando estas normas.

Es entendido que el concepto salario implica todo lo que constituye remuneración al trabajo a saber: Sueldos, primas, subsidios, bonificaciones, sobresueldos, etc., y por tanto todo lo que percibe el empleado oficial constituye salario.

Con lo anterior expuesto, queda desvirtuado lo preceptuado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** en cuanto a su manifestación que “De conformidad con lo ya expuesto este Despacho procede a confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución No 10765 del 13 de Junio de 2003, proferida por la Subdirección General de Prestaciones Económicas por considerar que se otorgo conforme a derecho.”

A continuación analizaremos si es o no aplicable la Ley 33 de 1985 a la Pensión Jubilación de mi poderdante.

Lo anterior ya que para liquidar la pensión se debe tener en cuenta la asignación mensual del salario más elevado que hubiera devengado e el último año de servicios, en concordancia con el art. 5 del Decreto 1743 de 1966.

El artículo 1° de la Ley 33 de 1985 establece que “El empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.”

Por lo antes analizado, concluimos que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL** al aplicar al presente caso la Ley 33 de 1985, violó la Ley y dejó de aplicar la norma correspondiente.

Señor Juez, no es justo, ni lógico, que la Entidad demandada aplique o deje de aplicar caprichosamente las Leyes de acuerdo a las conveniencias e interpretaciones de los funcionarios, perjudicando con ello a los beneficiarios.

Lo anterior, debido a que en la normatividad citada claramente se explica cómo determinar la cuantificación de la pensión mensual para los funcionarios de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION**



PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL , y que es aplicable al caso concreto de mi poderdante.

Resulta lamentable que los funcionarios encargados de aplicar las Leyes, las interpreten a su propio criterio. Tales políticas son las que hacen que las Entidades encargadas de tramitar las prestaciones se conviertan en organismos en nada contribuyen a la filosofía del Estado Social de Derecho, pregonada por nuestros gobernantes.

Por otra parte, para la presentación de la demanda me baso en lo expresado por el Honorable Consejo de Estado, en Sentencia del 30 de noviembre de 1994, siendo Consejero Ponente el Dr. CARLOS ARTURO ORJUJELA GONGORA, Expediente No. 10550; en la cual se pronunció sobre los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales, y al respecto manifestó que:

“... Los Actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, con en el asunto propuesto, “PODRAN DEMANDARSE EN CUALQUIER TIEMPO”. (Negrilla, Mayúsculas y Subrayado son míos).  
ARTICULO 270 DEL C.P.A LEY 1437 DE 2011

**SENTENCIAS DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL.** Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas a l mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36 de la Ley 1285 de 2009.

Por otro lado para tener más argumento en la petición base de esta demanda me permito hacer referencia a la siguiente Sentencia expedida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, de fecha 04 de agosto de 2010, Consejero Ponente Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Radicación No. 2006-07509 siendo demandante LUIS MARIO VELANDIA y demandado **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL.**

**SENTENCIA DE HOMOLOGACION DEL CONSEJO DE ESTADO (Agosto 4 de 2010).**

**PENSION DE JUBILACION – Factores. Inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios. Interpretación taxativa vulnera el principio de progresividad. Principio de igualdad. Principio de primaría de la realidad sobre las formalidades ( Sentencia de Unificación) En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último años de prestación de servicios. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 09 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones, - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985 , tal como ocurre en el cado del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de**



los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La ley 33 de 1985, modificada por la 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de Pensión de Jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.

**PROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL:** Según Sentencia del Honorable CONSEJO DE ESTADO de fecha 01 de Septiembre de 2009, dentro del proceso No.11001-03-15000-2009-00817-00 (AC) ACTOR: ISMAEL ENRIQUE MOLINA GUZMAN – DEMANDADO: JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE IBAGUE: **NO ES APLICABLE EL PRECEPTO LEGAL QUE EXIGE LLEVAR A CABO UNA CONCILIACION COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, TODA VEZ QUE SE ESTA FRENTE A UN ASUNTO DE INDOLE NETAMENTE LABORAL DONDE SE DEBATEN DERECHOS IRRENUNCIABLES, ITRANSIGIBLES Y POR TANTO NO SUSCEPTIBLES DE CONCILIACION..”**

**Sentencia C-298/02, Referencia: expediente D-3731, Carácter sucesivo y vitalicio**

*” Respecto al fondo del asunto se observa que, conforme lo ha definido la jurisprudencia, la pensión de jubilación, por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y, además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho ”.*

**ART. 162 Numeral 5 del CPA LEY 1437 DE 2011**

#### **PRUEBAS QUE HAGO VALER**

#### **DOCUMENTALES:**

1. Poder debidamente conferido
2. Original de la Resolución RDP 008760 del 5 de marzo de 2015
3. Original de la Resolución RDP 019118 del 14 de mayo de 2015
4. Original de la Resolución No. 011309 del 6 de mayo de 1998
5. Original de la Resolución No. 45591 del 7 de septiembre de 2008
6. Copia del Derecho de Petición de fecha 13 de noviembre de 2014
7. Copia del Recurso de Apelación del 25 de marzo de 2015
8. Original de la Constancia laboral y salarios de los años de 1996 – 1998 expedidos por el Ica de fecha 29 de agosto de 2012
9. Medio magnético (CD) de la demanda, poder y anexos de la presente acción
10. Demás documentos reposan en el expediente.

**ART. 162 Numeral 6 CPA LEY 1437 DE 2011**

#### **ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA**

#### **Numeral 6**

La estimo en la suma calculada en el recuadro siguiente y que es el resultado de la diferencia mensual por los meses correspondientes a cada año.

Bogotá Cra. 8. No. 16 – 88, Ofic. 907 Teléfono 3361122  
Ibagué Cra. 6 No. 13 – 22 Centro, Teléfono 098 – 2623816



AÑO	VALOR REAJUSTE MESADA	Nº MESADAS	VALOR TOTAL AÑO
2.009	\$1.364.187.00	6	\$5.185.122.00
2.010	\$1.391.470.00	14	\$6.480.580.00
2.011	\$1.435.580.00	14	\$6.098.120.00
2.012	\$1.489.127.00	14	\$6.847.778.00
2.013	\$1.525.461.00	12	\$3.576.383.00
TOTAL			\$28.187.983.00

ART. 166 CPA LEY 1437 DE 2011

ANEXOS

1. Los relacionados en el acápite de pruebas.
2. Copia de la demanda para las entidades demandadas.
3. Copia de la demanda para el traslado al señor Procurador Delegado ante el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
4. Copia de la Demanda y sus anexos para el archivo del Despacho.

Artículo 162 NÚMERO 7º. C.P.A LEY 1437 DE 2011

NOTIFICACIONES PERSONALES A LAS PARTES

PORTE DEMANDANTE: FRANCISCO ENRIQUE SALAZAR VALENCIA

Carrera 8ª. No. 16 – 88 Oficina 907

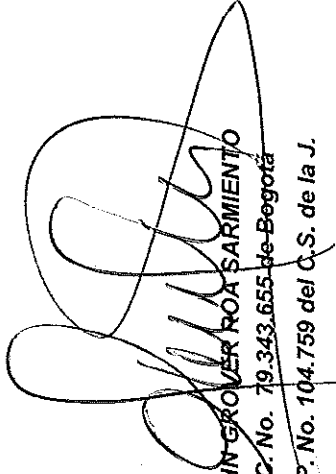
PORTE DEMANDADA: Calle 19 No. 68 A – 18, de la Ciudad de Bogotá, D.C.

notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co

APODERADO DEMANDANTE: En la Carrera 8 No. 16-88, Oficina 907. Teléfonos 336 11 22 Bogotá

D. C. Correo electrónico roayasociados@hotmail.com

Cordialmente,

  
JOHN GROVER ROA SARMIENTO  
C.C. No. 79.343.655 de Bogotá  
T.P. No. 104.759 del C. S. de la J.

Cam

Bogotá Cra. 8. No. 16 – 88, Ofic. 907 Teléfono 3361122  
Ibagué Cra. 6 No. 13 – 22 Centro, Teléfono 098 – 2623816